

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE JUSTICIA Y PAZ**

MAGISTRADO PONENTE: IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN

Radicación : 11001225200020140005900
Postulados : Luis Fernando Balaguera Archila, alias «300» o «Johan», y Francisco Antonio Cañón González, alias «Chucho»
Asunto : Impugnación de la contabilización del término de libertad a prueba
Acta No. : 16 / 23
Procedencia : Juzgado con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional
Decisión : Modificar parcialmente

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo dos mil veintitrés (2023)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los postulados LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», en contra del auto de 12 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, por medio del cual fijó el término de libertad a prueba en

4 años para el primero y en 3 años 6 meses para el segundo, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 19 de diciembre de 2018 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó, entre otros exmiembros del Bloque Central Bolívar (BCB), a LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», a 480 meses de prisión, multa de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.) y 240 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; y a FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», a la pena principal de 126 meses de prisión y multa 9.525 s.m.l.m.v. y 126 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; que suspendidas, se sustituyeron por una pena alternativa de 8 años (96 meses) para el primero y 7 años (84 meses) para el segundo, por delitos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno¹.

2. La anterior decisión fue apelada y mediante sentencia de 3 de marzo de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otras determinaciones, confirmó la referida condena.

3. A LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», le fue sustituida la medida de aseguramiento de detención preventiva el 2 de marzo de 2018, por parte de la magistratura con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, recobrando su libertad el 15 de marzo de 2018.

Se vinculó al proceso de reintegración con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) el 13 de abril de 2018.

El 7 de mayo de 2021, ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, suscribió el acta de

¹ Entre ellos, *concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, secuestro, amenazas, hurto y reclutamiento ilícito.*

compromiso frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

4. A FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «*Chucho*», le fue sustituida la medida de aseguramiento de detención preventiva el 1° de marzo de 2017, por parte de la magistratura con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá; autoridad que, igualmente, le suspendió la pena impuesta el 29 de julio de 2008 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucurí dentro del radicado 2007-00028, toda vez que no había sido acumulada en la sentencia transicional, pero sí fijada por hechos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno.

Dicha pena era vigilada por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bucaramanga, judicatura que tuvo en cuenta la señalada suspensión de la pena mediante auto dictado hasta el 22 de marzo de 2017. Por esta razón, el postulado recobró efectivamente su libertad el 28 de abril de 2017.

Se vinculó al proceso de reintegración con la Agencia para la ARN el 5 de abril de 2017, es decir, posterior al otorgamiento de la suspensión de la medida de aseguramiento por orden de la magistratura de Justicia y Paz, pero antes de la determinación del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bucaramanga (jurisdicción ordinaria) y de la materialización de su libertad.

El 7 de mayo de 2021, ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, suscribió el acta de compromiso frente al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

5. El Juzgado de Ejecución de Sentencias de esta especialidad avocó conocimiento de la vigilancia de las penas impuestas el 7 de mayo de 2021.

III. DECISIÓN IMPUGNADA

Mediante providencia de 12 de mayo de 2022 el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional fijó en 4 años² el término de libertad a prueba a LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y en 3 años 6 meses a FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la precitada providencia.

El sustento de esta determinación estribó en la aplicación del precedente horizontal y vertical. El primero, por cuanto desde su creación legal esa Judicatura siempre ha aplicado el mismo criterio en los casos en los que ha ejercido vigilancia. Y el segundo, porque la Sala Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los radicados 45321 de 16 de diciembre de 2015 y 47209 de 5 de octubre de 2016, señaló que este derecho no se adquiere de manera automática con el paso del tiempo, como sucede en la jurisdicción ordinaria, dado que en el proceso especial de Justicia y Paz es necesario comprobar el cumplimiento de los deberes de contribución a la reparación integral de las víctimas por parte de los postulados, así como las obligaciones impuestas en el fallo transicional, que justamente verifica el juzgado de ejecución de sentencias en las audiencias de vigilancia.

Advirtió el *a-quo*, que la Sala de conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla viene aplicando el precedente de la referida alta Corporación.

Comoquiera que los postulados no cumplieran con el término de libertad a prueba, igualmente, negó la prescripción y la extinción de las penas principales y accesorias impuestas en la sentencia parcial de 19 de diciembre de 2018.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

1. Recurrentes

² Equivalen a la mitad de la pena alternativa impuesta.

La defensa técnica de los postulados³ interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en lo relacionado con el momento a partir del cual comienza a contabilizarse el término de la libertad a prueba y solicitó que se cuente desde que obtuvieron la libertad.

En su criterio, existe un vacío legislativo en el conteo del término de libertad a prueba y la extinción de la pena frente a sentencias parciales. En este orden de ideas, acudiendo a la Ley 906 de 2004 y sin importar que sean fallos parciales, adujo, las sanciones deben extinguirse.

Aseguró que no pueden hacerse interpretaciones extensivas y en contra de los artículos 82 y subsiguiente del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con los artículos 52 y 66 del Código Penal, esto, teniendo en cuenta que la primera instancia sustentó su pronunciamiento en una decisión de la Sala de Justicia y Paz de Medellín. Por eso, insistió, que así las sentencias sean parciales, las penas deben extinguirse y no pueden suspenderse ni esperar hasta que se haga la última imputación en Justicia y Paz.

Si bien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia de diciembre de 2011, referenciada por el *a-quo*, señaló que sí pueden dictarse sentencias parciales, esa *ratio decidendi* no es posible adoptarla a la decisión impugnada.

Sostuvo su afirmación en el auto del 26 de abril de 2022 de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, radicado 2021-00083, por cuanto allí se declaró satisfecho el periodo a prueba y se extinguieron las penas principales y las accesorias, teniendo en cuenta que cada sentencia es una unidad de sanción. Tal consideración, en su criterio significa, que le corresponde al juzgado de ejecución de sentencia verificar los lapsos de la pena alternativa y de libertad a prueba, además, las obligaciones que cada fallo impone, así se hayan superado los periodos antes indicados. Por consiguiente, en el caso analizado debieron extinguirse las penas.

³ *Ibidem*, récord: 53:17.

También refirió, que en el precitado fallo dijo el Tribunal, con base en el Decreto 1069 de 2015, que si se comprueban los requisitos para extinguir la pena ordinaria, en igual sentido debe procederse con la multa y las sanciones accesorias. Luego, las penas ordinarias impuestas en las sentencias proferidas en este sistema, no se acumulan a las sanciones propias de la transicionalidad, por tanto, cumplida la pena alternativa, se excluye la ejecución de las penas ordinarias tasadas en los fallos condenatorios, salvo el cumplimiento de las obligaciones que este modelo de justicia impone.

Con base en lo anterior, solicitó revocar la providencia de 12 de mayo de 2022 y, en su lugar, se extingan las penas principales y accesorias a favor de LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho».

2. No recurrentes

2.1 La Fiscalía 100 especializada en apoyo de la Fiscalía 41 de la Dirección de Justicia Transicional⁴, en lo relacionado con el momento a partir del cual comienza a contabilizarse el término de la libertad a prueba, indicó, debía contarse desde que los postulados se vincularon a la ARN.

Frente a la petición de extinción de la pena, elevada por la defensa técnica a partir de la decisión de 26 de abril de 2022 de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, indicó, que ese caso es diferente al actual, dado que en ese se extinguieron las penas accesorias porque el postulado no tenía más investigaciones ni procesos en la justicia transicional y había cumplido con el término de libertad a prueba y todas las obligaciones impuestas en la sentencia. Por tanto, como aquí se trata de un fallo parcial, a diferencia del aludido pronunciamiento, pidió confirmar el auto de primera instancia, pues el postulado no ha honrado las obligaciones derivadas de los hechos que actualmente se están investigando.

⁴ *Ibidem*, récord: 1:20:50.

2.2 La delegada de la Procuraduría General de la Nación⁵, en lo relacionado con el momento a partir del cual comienza a contabilizarse el término de la libertad a prueba, señaló, debía contarse desde que los postulados se vincularon a la ARN. Sin embargo, precisó, no se oponía a lo decidido por la primera instancia, esto es, que ese periodo se contabilice a partir del día siguiente a la ejecutoria del auto que la concede, toda vez que hay diferentes interpretaciones y todas son posibles. En virtud de ello, deprecó confirmar la providencia apelada.

De cara a la extinción de las penas, afirmó, debe negarse, toda vez que los postulados no han cumplido el término de libertad a prueba, por lo mismo, la extinción de las penas no es viable.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, las decisiones de los juzgados de ejecución de penas relacionadas con la suspensión de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación son apelables ante la autoridad judicial que profirió la condena de primera o única instancia.

Con base en lo anterior, este despacho es competente para conocer la impugnación interpuesta por la defensa técnica del postulado LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», frente al conteo del término de libertad a prueba, comoquiera que fungió como ponente de la sentencia por medio de la cual los precitados, entre otros desmovilizados del BCB, fueron condenados parcialmente el 19 de diciembre de 2018.

2. Metodología y estructura de la providencia

Para resolver la impugnación planteada y determinar a partir de cuándo la autoridad judicial que vigila el cumplimiento de la sentencia transicional debe

⁵ *Ibidem*, récord: 1:24:00.

contabilizar el término de la libertad a prueba, se analizará el referido instituto a la luz de la norma que lo regula y pronunciamientos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

Esclarecido y determinado razonablemente el momento a partir del cual comienza a correr el periodo de libertad a prueba, el mismo se aplicará al caso concreto y se adoptará la decisión que en derecho corresponda.

De antemano se advierte, que este análisis modulará en clave constitucional el fundamento jurídico de la providencia proferida por esta Sala de decisión el 28 de octubre de 2021, radicado 2014-00103, mediante la cual se resolvió el problema jurídico bajo el criterio hermenéutico de contabilizar el término de libertad a prueba a partir de la firma del acta de compromiso por parte del postulado condenado, en punto del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia.

3. De la libertad a prueba

3.1 Este derecho está regulado en los incisos 4º y 5º del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 y se adquiere tras el cumplimiento de **(i)** la pena alternativa impuesta en la sentencia transicional y **(ii)** las obligaciones igualmente determinadas en el fallo condenatorio. Quiere decir, que esta garantía no surge de manera automática, sino que está precedida de la necesaria y obligatoria comprobación de los antedichos requisitos legales.

La normativa establece:

«Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en delitos, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia⁶.

⁶ En la sentencia C-370 de 2006 la Corte Constitucional declaró inexecutable algunos apartes de este inciso. En este orden de ideas, como la consecuencia jurídica de dicha declaratoria es el retiro del ordenamiento jurídico de los presupuestos, oraciones o frases que contravienen la Carta Política, estos no se transcribieron.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan» (destaca el Despacho).

Ahora bien, dadas las particularidades especiales del proceso de Justicia y Paz, es probable que el requisito cuantitativo se cumpla en tres escenarios diferentes, a saber: **a)** antes de que la jurisdicción transicional profiera sentencia (que puede ser parcial); **b)** luego de proferirse el fallo, pero previo a que alcance ejecutoria; **c)** posterior a la firmeza de la condena.

En las dos primeras hipótesis, todavía no puede hablarse ni se activa, en estricto sentido, el instituto de la libertad a prueba, pero los derechos del postulado se garantizan a través de la sustitución de la medida de aseguramiento y por vía del artículo 18A de la Ley 975 de 2005, cuando cumple en detención preventiva el tiempo máximo establecido para la pena alternativa.

Lo anterior, en manera alguna significa que, en el evento que al postulado le otorguen el sustituto de la medida de aseguramiento, posteriormente, tras ser condenado y adquirir firmeza el fallo, no sea necesario examinar si tiene derecho a la libertad a prueba; siendo indefectible para su concesión, por principio de legalidad, la comprobación del segundo requisito del inciso 4º del artículo 29 *ibídem*, esto es: el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia, función que le compete al Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional⁷.

Parece evidente, en principio, que la magistratura de Justicia y Paz debe proferir sentencia y esta encontrarse en firme (acto antecedente) para que la judicatura que la vigila y ejecuta, verifique el cumplimiento del segundo requisito de orden legal, esto es, las obligaciones impuestas en el fallo (acto consecuente).

⁷ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321. Dicha competencia funcional no es solo por virtud del artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 28 de la Ley 1592, sino porque en la práctica no puede hablarse de libertad a prueba si el fallo por medio del cual se impusieron, tanto la pena alternativa como las respectivas obligaciones inherentes al proceso de Justicia y Paz, no ha quedado en firme.

Tal aserto, pese a su obviedad y sin temor a su iteración, es necesario precisarlo, pues resultaría contrafáctico, y si se quiere imposible, comprobarlo antes de emitir dicha providencia, así el postulado tenga la carga y el compromiso de honrar las obligaciones propias de la Ley de Justicia y Paz para ser aceptado, permanecer en la jurisdicción transicional y cumplir los requisitos de elegibilidad (arts. 10 y 11 *ibídem*), que justamente permiten emitir sentencia en su contra y ser destinatario de los beneficios de la alternatividad penal (art. 3 *ibídem*).

3.2 En este propósito es fundamental recordar que, este proceso especial transicional es progresivo y la verificación de la voluntad de paz⁸ y contribución efectiva se torna permanente y en distintas etapas del proceso, tanto administrativo como judicial, desde el inicio y hasta el final, en consideración a que es indispensable constatarla en el acto mismo de desmovilización y para la postulación por parte del Gobierno Nacional; también, en la formulación de imputación, la audiencia concentrada y, como ya se dijo, previo a la emisión de la sentencia condenatoria.

Ejemplo dicente de lo anterior, es la figura de la terminación anticipada del proceso por exclusión de lista de configurarse en el decurso procesal especial alguna de las causales previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005. De lo contrario, es decir, si solo bastara la primigenia manifestación de la voluntad de paz por parte del postulado y esta abarcara todo el trámite, el instituto de la exclusión perdería total sentido.

La misma prerrogativa y potestad progresiva se ejerce en fase de ejecución de la pena y es indispensable para mantener los beneficios, al punto que nuevamente se comprueba para la concesión de la libertad a prueba y para fijar el término de ese derecho, en tanto la ley faculta al tribunal fallador a imponer nuevas obligaciones en la sentencia, que de no verificarse en esa última etapa procesal (fase ejecutiva), inexorablemente conducen a la negación del derecho aludido y la consecuente pérdida de beneficios.

⁸ La resocialización es una manifestación de la voluntad de paz, pero no la agota en su totalidad.

Por tanto, de ninguna manera puede predicarse que la voluntad de paz, expresada en pretéritas fases del proceso, es suficiente para mantener los beneficios de la justicia transicional hasta el final y para el otorgamiento de la libertad a prueba en la etapa ejecutiva, ya que es factible que dicha voluntad se quiebre con el paso del tiempo, por ejemplo, contraviniendo las obligaciones asignadas en el fallo condenatorio, que de suyo, es suficiente para negar el derecho, revocarlo e incluso para expulsar al postulado del trámite de Justicia y Paz, tal como lo establece el inciso 5º del artículo 29 *ibídem*.

3.3 Tan es así, que el artículo 44 de la Ley de Justicia y Paz, modificado por el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, determina que en la sentencia se puede imponer u obligar al postulado a llevar a cabo los actos de contribución a la reparación integral allí enlistados. Y remata en el párrafo indicando que: «*La libertad a prueba estará sujeta a la ejecución de los actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados en la sentencia*» (destaca la Sala), lo que, como se ha venido insistiendo, solo es posible hacer posterior a su emisión y no antes (es imposible).

Esto guarda concordancia con el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 16 de diciembre de 2015, radicado 45.321, en el entendido que «*la concesión de la libertad a prueba no se produce automáticamente por el simple transcurrir del tiempo en el que se ejecuta la pena impuesta en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal ordinario, ya que en el trámite transicional se involucra el cumplimiento de obligaciones específicas*» (destaca la Sala), porque de cara a este instituto, «*es menester verificar el cumplimiento de los actos de contribución a la reparación integral ordenados en la sentencia y demás cargas impuestas en la misma*».

3.4 Esta consideración tampoco significa que el cumplimiento de las obligaciones y su verificación sean lo mismo y se lleven a cabo en un solo momento, en tanto lo primero es previo y emana de la voluntad y compromiso del postulado; mientras lo segundo, es posterior y se hace en desarrollo de un deber legal de la judicatura y, por antonomasia, en un acto

procesal específico.

Así, el postulado puede cumplir con las órdenes de contribución a la reparación integral, las manifestaciones de disculpas públicas e ingreso al proceso de reincorporación de la ARN, impuestas en el fallo transicional en firme, pero el Juzgado de Ejecución de Sentencias, tiempo después, hacer la respectiva comprobación.

Incluso, esta expresión voluntaria del postulado puede materializarse y verificarse previo a la emisión de la sentencia transicional, cobrando sentido la función facilitadora, de orientación y acompañamiento desarrollada por la ARN, que se convierte en insumo significativo y definitivo para la confirmación que hace la judicatura que vigila el cumplimiento de las sanciones y obligaciones del desmovilizado condenado.

Luego, es probable que el lapso entre el cumplimiento efectivo y la verificación sea prolongado, lo que puede obedecer a diversos motivos, como por ejemplo, la realización de todas las cargas funcionales asignadas al juzgado executor, mismas que son interpretadas altas, si se tiene en cuenta que solo hay un despacho para ejecutar y vigilar todas las providencias dictadas por la integralidad de las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional (Bogotá, Medellín y Barranquilla), cuyos mandatos, hechos del conflicto armado, víctimas y postulados, suelen contarse por miles, siendo diferente la situación jurídica de cada desmovilizado, pero igual de importante.

3.5 Esta hermenéutica, de suyo garantista y basada en el principio *pro personae*⁹, permite a la Sala establecer sin dubitación, que el término de libertad a prueba no puede contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en que se fija, por cuanto puede transcurrir un periodo importante entre la expresión de la voluntad del postulado de honrar las obligaciones impuestas en la sentencia (o que se impondrán) y la verificación que hace la Judicatura que vigila el efectivo cumplimiento de los imperativos de contribución a la reparación integral y la búsqueda del fin último del

⁹ También conocido como: *pro homine*.

Acuerdo de Paz.

De ahí que por razones constitucionales¹⁰, que devienen de los principios *pro libertate* y de plazo razonable, no se pueda cargar dicho tiempo (ya sea mucho o poco) a la parte más débil de la relación Estado-ciudadano, esto es, al postulado, en la medida que no está en el deber jurídico de soportarlo.

Es improrrogable, entonces, **reconocer el derecho a partir del momento en que efectivamente se adquirió, es decir, cuando el destinatario se vinculó al proceso de la ARN, dado que allí manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia**, pues tal expresión y compromiso de contribución a la consecución de la paz, solamente depende de él y no de la concreción de algún acto jurídico o formalidad de una autoridad estatal, que, se insiste, no es atribuible a aquel. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz lo constate con posterioridad y de acuerdo con su agenda.

Téngase en cuenta, además, que el principio *pro personae* se sustenta y desarrolla en la prevalencia de la aplicación de la *norma* más favorable o la *interpretación* más amplia en punto de la garantía y protección de los derechos humanos, que en el análisis específico que concentra a la Sala, se compendia prefiriendo el sentido más vasto, protector y garantista de la norma concernida, esto es, se itera, **partiendo del hecho cierto e inequívoco que es la expresión de la voluntad del postulado de honrar los compromisos del Acuerdo de Paz de la Ley 975 de 2005 cuando se vincula a la ARN**; acto que, además, está precedido y amparado por el principio constitucional de buena fe (art. 83).

Vale aclarar, que el denotado acto de vinculación a la ARN es obligatorio, como lo afirma el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 35 de la Ley 1592 de 2012, y concreta uno de los fines del proceso penal transicional y especial, cual es, la reintegración particular diferenciada del postulado; cuyos requisitos, características, condiciones y obligaciones, son

¹⁰ Es un fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, conforme el artículo 2 de la Carta Política.

definidas por la señalada agencia por mandato del artículo 95 del Decreto 3011 de 2013¹¹.

En ejercicio de esa facultad legal, la ARN estableció en el artículo 2 de la Resolución 1962 de 2018¹², la presentación personal, posterior e ineludible del postulado en el plazo perentorio de 30 días calendario, siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial que concedió la libertad efectiva, con el fin de dar inicio al proceso y ruta de reincorporación social.

Esto permite colegir, que no basta con la sustitución de la medida de aseguramiento y/o la materialización de la libertad para comenzar a contabilizar el término de libertad a prueba, toda vez que si el desmovilizado no se presenta, se configura el supuesto de hecho para activar el parágrafo 2 de la precitada norma, es decir, informar a las autoridades judiciales y/o administrativas el incumplimiento de los compromisos del proceso de Justicia y Paz, así como de las obligaciones impuestas en la sentencia.

Por razón de ello, no es posible contabilizar el término de libertad a prueba desde el momento en que se sustituye la medida de aseguramiento y/o se materializa la libertad del postulado, por cuanto a partir de ese instante, comienza a correr para aquel el plazo ineludible de 30 días calendario para honrar el compromiso de paz estable y duradera, acudiendo de forma voluntaria a la ARN para iniciar la ruta de reintegración particular diferenciada¹³.

3.6 De esta misma línea hermenéutica se deduce que, una cosa es la imposición de obligaciones por parte de la judicatura en la sentencia y otra el cumplimiento de estas a partir del señalado acto del Tribunal de Paz. En otras palabras, las señaladas condiciones son propiciadas por el cuerpo colegiado para que el desmovilizado que expresó su voluntad de reconciliación, reparación y readaptación social, las materialice (acto voluntario que, como viene de verse, puede ser previo). Ante esto, es fundamental verificar la plena disposición del postulado, toda vez que este

¹¹ Artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1069 de 2015.

¹² Modificó el artículo 2 de la Resolución 1724 de 2014.

¹³ Tanto el compromiso, como presentarse a la ARN, son obligatorios.

interregno o plazo no le es atribuible (no depende de él).

Ergo, se precisa ineludible establecer si es constitucional que el postulado cargue con el peso procesal y temporal que requiere: **primero**, la emisión de la sentencia que impone los deberes y permite contabilizar el término del precitado derecho; **segundo**, la firmeza del fallo; y **tercero**, la asunción del conocimiento por parte del Juzgado de ejecución de sentencias, así como la disposición de agenda y fijación de audiencia para la respectiva verificación. También, si en aplicación de principios constitucionales (como el de plazo razonable), el desmovilizado está en el deber jurídico de soportar tal contingencia o solo basta con la expresión inequívoca de su compromiso con el Proceso de Justicia y Paz, conforme se interpreta de su ingreso y puesta a disposición de la ARN para el inicio de la ruta de reincorporación.

Ante esto, la respuesta de esta Sala de decisión, en comprensión amplia, protectora y garantista de los derechos constitucionales, es que sin duda dicho término no debe ser soportado por el postulado y tal situación de aparente indefinición jurídica, debe ser interpretada a favor de las prerrogativas fundamentales a una pronta y cumplida justicia, libertad personal, buena fe y no aprovechamiento de las condiciones de superioridad por parte de la autoridad, toda vez que la confianza legítima de los firmantes del Acuerdo de Paz concretado en la Ley 975 de 2005 y de la sociedad en general, puede ser defraudada con interpretaciones restrictivas, como la que fue objeto de alzada; ya que las vicisitudes que han impedido el fortalecimiento y culminación de la investigación, juzgamiento y reparación integral de los hechos del conflicto armado interno, no son de la órbita de competencia ni de iniciativa del excombatiente que voluntariamente dejó las armas y se sometió a este régimen transicional especial.

Sin duda, es sustancial aclarar que esto es reglado y que el cumplimiento de los compromisos propios de la ley (que incluye las obligaciones impuestas en la sentencia¹⁴, porque se contempla en el artículo 29 *ibídem*), debe ser

¹⁴ Que son específicas y derivan de las obligaciones generales previstas en el Acuerdo de Paz –Ley 975 de 2005–, a saber: aporte a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición, que se concretan, por ejemplo, en una reincorporación diferenciada y eficaz del concernido. Estas, a su vez, tienen ligamen directo con los requisitos de elegibilidad y, en otras palabras, se traducen en: «(...) *continuo balance desde el momento mismo de la*

vigilado y comprobado progresiva y constantemente mientras el postulado esté por cuenta del proceso especial, so pena de perder los beneficios, como por ejemplo, la alternatividad penal. Sin embargo, se enfatiza, que la facultad y deber de vigilancia por parte del Estado, no es indefinido ni indeterminado, tampoco perenne.

3.7 Esto armoniza con el contenido *ius* fundamental del artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la finalidad esencial de la pena de prisión en un Estado social de derecho debe ser siempre «(l)a reforma y readaptación social de los penados», con pleno reconocimiento del plexo de garantías fundamentales; teleología que se desestructura y trunca cuando se imponen cargas excesivas a los condenados, que en manera alguna deben soportar, máxime cuando ni siquiera fueron previstas en el ordenamiento jurídico.

Además, concuerda y se complementa con los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990, en la medida que el No. 10 elocuentemente indica que, «(c)on la participación y ayuda de la comunidad y de instituciones sociales, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas, se crearán condiciones favorables para la reincorporación del ex recluso a la sociedad en las mejores condiciones posibles».

Luego, obstáculos de índole no legal y/o de aplicación o interpretación restrictiva, que evidentemente no acompañan ni superan una hermenéutica garantista y favorable, no solo para la persona que afronta una situación severa de privación de la libertad, sino de aquella que superó lo anterior y quiere readaptarse y reincorporarse a la sociedad, pueden traducirse como forma de discriminación o parcialidad, que conspira contra los principios No. 2 y 11 y pueden generar consecuencias nocivas para el sujeto de derecho de especial protección, la sociedad y el Estado.

reincorporación del postulado a este sistema de justicia transicional» y hasta su culminación. Cfr. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, providencia de 27 de septiembre de 2021, radicado 2013-00311.

3.8 Por último, el criterio acogido sistematiza con la postura jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, plasmado en la providencia de 12 de julio de 2022, radicado 61.471, que reiteró palmario que la finalidad constitucional de la pena de prisión es la resocialización como garantía de la dignidad humana, pues debe ser vista más allá de un trivial y simple castigo, y se hace presente en las distintas etapas del proceso penal, siendo que, «*en la fase de ejecución de la pena, ésta debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción sociales*¹⁵». Dicho razonamiento fue tomado de la sentencia de tutela STP15806-2019, radicado 683.606, emanada del mismo máximo tribunal.

Así, se cristaliza la intención de la justicia transicional que, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, busca hacer un tránsito pacífico de la guerra a la convivencia pacífica duradera (y de las dictaduras a las democracias), evitar la repetición de hechos vulneradores de derechos humanos y reconstruir el tejido social afectado tras largos años de desestructuración por y como consecuencia del conflicto armado; con el propósito último y loable de hacer realidad la reconciliación nacional.

Virtud que, oportuno es resaltarla, tuvo en cuenta el Estado al inspirar la negociación y los acuerdos en la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual, colectiva y condicionada de los miembros de los GAOML; materializando y concretando el contenido trascendente del derecho a la Paz del artículo 22 de la Constitución Política que, a su vez, dio frutos en la Ley 975 de 2005, dando paso al proceso especial y excepcional que hasta hoy ha permitido, con grandes esfuerzos y ciertas dificultades, que los destacados fines sean realidad; dato fáctico, tal vez, subvalorado en la actualidad, pero cimiento y modelo en el ámbito doméstico y foráneo en los venideros días.

4. Caso concreto

¹⁵ Claus Roxin, “*Culpabilidad y prevención en Derecho Penal*”, Traducido por: F. Muñoz Conde, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 47.

4.1 En el caso puesto a consideración de la Sala, se parte del hecho que LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», satisficieron los presupuestos para la concesión de la libertad a prueba previstos en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005, esto es, **(i)** pagaron la pena alternativa impuesta por este Tribunal en la sentencia de 19 de diciembre de 2018 y **(ii)** cumplieron las obligaciones determinadas en el precitado fallo.

Tal verificación la hizo el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional en el auto de 12 de mayo de 2022¹⁶ y no fue objeto de apelación. Por tanto, atendiendo el principio de limitación, este aspecto no será analizado y se entienden superados los requisitos de orden legal.

4.2 Así las cosas, el examen se contrae a establecer el momento a partir del cual debe contabilizarse el periodo de la libertad a prueba concedida a LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», que como fue expuesto y sustentado en *supra* **3.4** y **3.5**, se hace a partir del momento en que efectivamente se adquirió el derecho, es decir, **cuando el postulado se vincula al proceso de la ARN, dado que en ese acto manifiesta inequívocamente su voluntad de honrar las obligaciones impuestas o que se impondrán en la sentencia.**

En este orden de ideas, en el auto de 12 de mayo de 2022 el Juzgado ejecutor señaló que las obligaciones impuestas en la sentencia condenatoria estaban dispuestas en el numeral 4.9 de la parte motiva y en los ordinales **OCTOGÉSIMO SEGUNDO** y **CENTÉSIMO QUINCUGÉSIMO** de la parte resolutive.

En cuanto a las enlistadas en la parte motiva, el *a-quo* determinó que estaban satisfechas y sustentó su posición en el análisis de resocialización y aprobación de los magistrados con función de control de garantías de las Sala de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores cuando otorgaron la

¹⁶ Archivo 003. Auto 12 de mayo de 2022 SITUACIÓN JURÍDICA BALAGUERA ARCHILA Y CAÑÓN GONZALEZ 15-05-2022

sustitución de la medida de aseguramiento y en las actas de compromiso suscritas por los postulados ante ese despacho.

En lo que hace a las previstas en la parte resolutive, referentes al ofrecimiento de disculpas y pedimento de perdón, advirtió el *a-quo*, que los postulados remitieron escritos contentivos de lo anterior, por lo que corrió traslado a la Dirección Técnica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que lo socializaran con las personas afectadas por los hechos del conflicto armado de la estructura armada a la que pertenecieron los desmovilizados y emitieran el respectivo concepto técnico, precisando, que si dicha oficina lo estimaba, debían corregirlos, previo a la publicación en un diario de amplia circulación nacional y regional. Es decir, los postulados también consumaron este compromiso impuesto en el fallo.

Adicionalmente, el Juzgado executor les recordó en el proveído impugnado, que no bastaba con la simple verificación de exigencias en esta etapa procesal y con miras a obtener el beneficio de la libertad a prueba, toda vez que su deber con el proceso de Justicia y Paz es continuar honrando los compromisos de participación y contribución con el esclarecimiento de la verdad.

Esto, evidentemente se aviene con lo planteado por la Sala en el acápite anterior, relativo a que la constatación de las obligaciones de la jurisdicción transicional es progresiva y permanente. A lo que añade, que lo mismo se predica del imperativo de resocialización a través del proceso de reintegración especial de Justicia y Paz de la ARN, ya que, si no se respetan hasta el final, inexorablemente trae como consecuencia la pérdida de beneficios de la especialidad.

4.3 Por virtud de lo expuesto y como en este caso se logró determinar el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas en la sentencia (adquisición del derecho) con la vinculación al proceso de la ARN el **13 de abril de 2018** por parte de LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y el **5 de abril de 2017** por parte de FRANCISCO

ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «*Chucho*», será este, respectivamente, el momento procesal a partir del cual se contabilice el término de libertad a prueba para cada uno de ellos.

4.4 Se precisa, que no es oponible el argumento de que hasta el 12 de mayo de 2022 el Juzgado corroboró los condicionamientos de la parte resolutive del fallo, comoquiera que en la decisión simplemente se les recordó y conminó a que continuaran honrándolos, so pena de perder los beneficios.

Tampoco, que los postulados acepten silentes el tiempo transcurrido entre la adquisición del derecho y la fecha en que la judicatura por decisión les reconoció la libertad a prueba, toda vez que, como se indicó párrafos arriba, estos no tienen el deber jurídico de soportar las cargas y vicisitudes que se generan por la vigilancia de las penas a un número superlativo de postulados condenados.

4.5 Finalmente, en lo relacionado con la petición de extinción de las penas ordinarias y accesorias, debe advertir la Sala, que la misma no procede, comoquiera que los postulados LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «*300*» o «*Johan*», y FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «*Chucho*», no han cumplido con el término de libertad a prueba, que se erige como requisito fundamental para estudiar la viabilidad de extinción de la sanción, conforme lo enseña el inciso 5° del artículo 29 de la Ley 975 de 2005¹⁷.

4.6 Conclusión

Con base en lo anterior, la Sala modificará parcialmente el ordinal **PRIMERO** del auto de 12 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de libertad a prueba se contará a partir de la adquisición del derecho con la vinculación al proceso de la ARN, esto es, desde el **13 de abril de 2018** para LUIS FERNANDO BALAGUERA

¹⁷ «***Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan***» (destaca el Tribunal).

ARCHILA, alias «300» o «Johan», y desde el **5 de abril de 2017** para FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho».

En todo lo demás que fue objeto de apelación, la Sala confirmará el auto de 12 de mayo de 2022.

VI. En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el auto de 12 de mayo de 2022 proferido por el Juzgado de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, en el entendido que el término de libertad a prueba se contará a partir del **13 de abril de 2018** para LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias «300» o «Johan», y del **5 de abril de 2017** para FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ, alias «Chucho», de acuerdo con la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto de 12 de mayo de 2022.

TERCERO: Devolver la actuación al juzgado de origen.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase,


IGNACIO HUMBERTO ALFONSO BELTRÁN
Magistrado


ALEXANDRA VALENCIA MOLINA
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
OHHER HADITH HERNÁNDEZ ROA
Magistrada
Salvamento de voto

Firmado Por:
Oher Hadith Hernandez Roa
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **84300208b23e8e9f2dae8705348dedd9571df634f65c746faea2a36bad0c2c47**

Documento generado en 16/06/2023 01:14:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>